



HIPOTECAS SOBRE EL FUTURO

Ludolfo PARAMIO

Los economistas son gente extraña, especialmente los que se dedican a estudiar la política con las herramientas del análisis económico. Ahora hay unos cuantos a los que preocupa saber si es posible para los gobiernos adquirir compromisos duraderos, compromisos a largo plazo, y que los ciudadanos les crean. El punto de partida no es, como cabría pensar, que los ciudadanos no crean nada que un político pueda decir o prometer, sino el hecho, más obvio, de que en los países democráticos los gobiernos cambian cada cierto número de años, y un nuevo gobierno puede considerar necesario abandonar los compromisos del anterior.

Cuando un ciudadano firma un contrato con otro, los dos saben a lo que se obligan, y a ninguno le está permitido decir al cabo de un tiempo que ha cambiado su forma de ser, o su personalidad, y que ahora cree que el contrato es inconveniente y ya

no se siente obligado a cumplirlo. Bastantes ciudadanos querrían poder hacerlo en algún momento de sus vidas, pero sólo siguiendo procedimientos laboriosos, reglamentados y con frecuencia caros, es posible anular un contrato: un excelente ejemplo es el divorcio.

*Desde el punto de vista
pragmático bajar
la presión final es jugar
con fuego.*

Los gobiernos, en este sentido, gozan de una posición envidiable: nadie puede pedirle a un nuevo gobierno, si cuenta con mayoría para legislar, que cumpla los compromisos del anterior, excepto los recogidos en el marco constitucional que obliga a todos los gobiernos.

Esta ventaja, sin embargo, tiene graves inconvenientes: un gobierno no puede exigir a los ciudadanos sacrificios o renunciaciones cuya compensación exija un horizonte temporal que vaya más allá de su propio plazo de gestión. O, mejor dicho, si los exige puede provocar una oposición social unánime por la poca credibilidad de sus promesas de restitución futura. Es sabido, sin embargo, que algunos gobiernos querrían introducir cambios que a corto plazo imponen un cierto precio a los ciudadanos, y cuyas consecuencias positivas sólo se perciben a medio o largo plazo: ¿cómo pueden los gobiernos conseguir que esas reformas sean aceptadas cuando ni siquiera pueden garantizar su propia continuidad?

Ese es uno de los problemas que se han planteado en las reformas económicas de los años ochenta, y no tanto respecto a los ciudadanos como a los inversores. Un gobierno que quiere garantizar la estabilidad monetaria necesita ante todo ser creído por los agentes económicos, pero tiene pro-

blemas para lograr que éstos crean, primero, que habla en serio cuando dice que no va a devaluar ni a emitir moneda, y segundo, que la nueva política va a durar lo suficiente como para que merezca la pena cambiar las estrategias empresariales e inversoras. Por eso, para lograr credibilidad los gobernantes hacen cosas descabelladas como fijar la paridad del peso por ley (Cavallo en Argentina) o privatizar empresas públicas eficientes y rentables.

La idea es que los gobernantes, para garantizar la continuidad de sus políticas, deben hipotecar a los gobiernos futuros, haciéndoles muy difícil modificarlas: elevando los costes de transacción de un cambio de política, en la jerga de esos seres desdichados, los economistas. Si el coste de dar marcha atrás es demasiado alto, las nuevas políticas aparecerán como mucho más creíbles, casi como irreversibles. Hasta aquí la teoría general: el problema es saber qué sucede cuando hay razones para sospechar que las nuevas políticas son innecesarias, insensatas o simplemente nocivas.

Un ejemplo de estas políticas son las bajadas de impuestos que se propugnan desde los años ochenta en muchos países desarrollados. Conviene recordar que el presidente Kennedy peleó en su día por una reducción de la presión fiscal para dinamizar la economía desde una perspectiva ortodoxamente keynesiana: bajar los impuestos no ha sido siempre una bandera de la derecha. Pero desde la malhadada experiencia de Reagan de bajar los impuestos, a la vez que aumentaba el gasto militar y elevaba los tipos de interés, la disminución de la presión fiscal tiene una connotación claramente ideológica.

No sólo es una propuesta conservadora (contra la idea de financiar lo público), sino ajena a toda racionalidad pragmática. Bajar los impuestos se considera deseable en sí mismo, independientemente de la coyuntura económica o del nivel previo de la presión fiscal. Reducir la presión fiscal (y el gasto público) en Suecia, en la nueva realidad de la economía globalizada, puede ser cosa bastante sensata. Hacerlo en Estados Unidos o Gran Bretaña, que tienen unos niveles de presión fiscal indecorosamente bajos para el promedio de la OCDE, probablemente no. Y si además se quiere financiar un vasto programa de rearme, como en la primera presidencia Reagan, se trata claramente de un disparate.

Ya lo dijo George Bush, compitiendo en las primarias republicanas con Reagan: se trataba de economía vudú, magia ideológica disfrazada de teoría económica. Pero, cuando le tocó disputar con George Dukakis la sucesión de Reagan, Bush ya era prisionero del vudú, y cometió el conocido error de pedir a los ciudadanos que leyeran en sus labios la sagrada promesa: *no more taxes*, no habrá subida de impuestos. Por supuesto, se la envainó, gráfica expresión castellana que quizá no sea habitual en México, y le tocó subir los impuestos para enfrentarse al déficit. Podía haber sido secuestrado por la magia, pero no era un irresponsable. Ahora bien, tanto en la promesa como en el precio político que pagó por quebrantarla se evidenciaba que estaba hipotecado por las expectativas creadas por los gobiernos de Reagan.

En España, el Partido Popular prometió en las elecciones de 1996 bajar la presión fiscal. El punto de partida es bastante bajo para el promedio euro-

peo, independientemente de que existan razones sensatas para pensar en la conveniencia de reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas: la lógica de la promesa electoral era responder a las demandas de las clases medias altas y acentuar la idea de que el nuevo gobierno sería ahorrador y eficiente. (Los escándalos de los últimos años de gobierno socialista, independientemente de su carácter limitado, habían servido al PP para presentar la crisis económica de 1992-95 como una consecuencia de la gestión corrupta y despilfarradora de los socialistas, obviando que la crisis alcanzaba a todas las economías europeas.)

La reforma conservadora del IRPF deberá entrar en vigor en 1999. Nadie habría creído posible introducirla antes de entrar en la moneda única, y por tanto los nuevos gobernantes se limitaron inicialmente a reducir la tributación sobre las rentas del capital. Pero ahora tienen que cumplir su promesa si quieren que les dé algún rendimiento electoral, especialmente mientras exista la posibilidad de que las elecciones generales se adelanten a la primavera de 1999, para hacerlas coincidir con las elecciones municipales y automáticas y con las elecciones al Parlamento Europeo.

Ahora bien, desde el punto de vista pragmático se trata de jugar con fuego:

***Si Aznar se juega todas
las cartas en la primavera
del 99, no podrá «pasar página»
en el caso GAL.***

la inflación en el sector de servicios es un peligro constante, y la bajada de los tipos de interés ha inducido un ya notable crecimiento del consumo. En 1999 los tipos habrán bajado un punto más (por razones de preparación de la entrada en vigor del euro), y si a esto se suma la inyección de liquidez resultante de la bajada de los impuestos, el peligro de que la inflación se desate es bastante grande. Por otra parte, el gobierno quiere recuperar la inversión pública, casi paralizada este año, en los presupuestos de 1999, además de incrementar significativamente la inversión en educación y en I+D. Puede que el incremento del consumo se traduzca en una recaudación suficiente para cuadrar las cuentas, pero es evidente que el gobierno se va a mover en el filo de la navaja.

El propio riesgo de la operación favorece la idea de un adelanto de las elecciones, especialmente si el déficit y/o la inflación levantan sus feas cabezas en el paraíso de José María Aznar. Si las cuentas comienzan a torcerse en los primeros meses de 1999, es muy poco probable que el gobierno conservador decida dar muestras de responsabilidad y tomar medidas impopulares asumiendo el precio político en el 2000. Por el contrario, parece esperable que decida juntar todas las elecciones: si gana de nuevo podrá ajustar el cinturón a los españoles, confiando en que para el 2003 sus ma-

***Un gobierno que busca
garantizar la estabilidad
monetaria necesita ante
todo credibilidad.***

los pasos hayan quedado olvidados, y, si pierde, allá se las entienda el gobierno que le suceda. Contando, además, con que difícilmente se ganan elecciones anunciando subidas de impuestos, la hipoteca recaería doblemente sobre la oposición socialista.

Esta posibilidad de adelanto electoral encaja bien con otros hechos: la salida del asilvestrado portavoz Miguel Angel Rodríguez y su sustitución por un ministro de perfil centrista, o la firma de la paz con el grupo Prisa a través del acuerdo de Telefónica con Sogecable para unificar las respectivas plataformas de televisión digital, poniendo fin a una guerra que estuvo a punto de llevar a la cárcel al fundador de *El País*, Juan Luis Cebrián, y a buena parte de los directivos del grupo. Pero también encaja con una estrategia contradictoria: el intento de utilizar el fallo condenatorio contra el exministro socialista del Interior, José Barriónuevo, en el juicio contra los GAL, para emprender una nueva campaña contra Felipe González.

Esta campaña es obvio que busca liquidar a González como candidato a presidente de la Comisión Europea en 1999, a la vez que quemarle ante la temida posibilidad de que regrese a la vida política nacional. Si Aznar va a jugar todas sus cartas en la primavera de 1999, no puede cumplir otra de sus promesas, la de «pasar página» sobre la cuestión de los GAL, que divide profundamente a los españoles, una vez que los tribunales hubieran actuado.

El problema es que las dos estrategias casan mal entre sí: no se puede pretender ofrecer una imagen más civilizada y a la vez ir al acoso y de-

rribo de Felipe González y de los socialistas, que, lógicamente, cierran filas en torno a él. La mayor parte del voto centrista y de clase media, que Aznar quiere atraerse, no es *antifelipista*, contra lo que parece creer Pedro José Ramírez, ideólogo del régimen y director del diario *El*

Mundo. Incluso entre quienes no le votaron (o votaron *contra* él) existe el esperable respeto ante un expresidente del gobierno cuyo balance sigue siendo espectacular. También en este punto hay razones para creer que los conservadores están jugando con fuego.
